

La consulta plantea si existe colisión entre el contenido de lo dispuesto en la Ley de Bases del Régimen Local y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Esta cuestión ya ha sido analizada por la Agencia Española de Protección de Datos en el informe de fecha de 2 de agosto de 2007, en el que se establecía lo siguiente:

*“Del contenido de la consulta se desprende que tras la modificación operada en el artículo 75 la Ley 7/1985, de 2 abril de Bases del Régimen Local, por lo dispuesto en la Disposición Adicional novena de la Ley 8/2007, de 28 de mayo del Suelo que establece lo siguiente “(...)7. Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos.*

*Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades.*

*Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así cuando se modifiquen las circunstancias de hecho.*

*Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter anual, y en todo caso en el momento de la finalización del mandato, en los términos que fije el Estatuto municipal.*

*Tales declaraciones se inscribirán en los siguientes Registros de intereses, que tendrán carácter público:*

*a) La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, se inscribirá en el Registro de Actividades constituido en cada Entidad local.*



*b) La declaración sobre bienes y derechos patrimoniales se inscribirá en el Registro de Bienes Patrimoniales de cada Entidad local, en los términos que establezca su respectivo estatuto.*

*Los representantes locales y miembros no electos de la Junta de Gobierno Local respecto a los que, en virtud de su cargo, resulte amenazada su seguridad personal o la de sus bienes o negocios, la de sus familiares, socios, empleados o personas con quienes tuvieran relación económica o profesional podrán realizar la declaración de sus bienes y derechos patrimoniales ante el Secretario o la Secretaria de la Diputación Provincial o, en su caso, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. Tales declaraciones se inscribirán en el Registro Especial de Bienes Patrimoniales, creado a estos efectos en aquellas instituciones.*

*En este supuesto, aportarán al Secretario o Secretaria de su respectiva entidad mera certificación simple y sucinta, acreditativa de haber cumplimentado sus declaraciones, y que éstas están inscritas en el Registro Especial de Intereses a que se refiere el párrafo anterior, que sea expedida por el funcionario encargado del mismo.” Se plantea si la comunicación de dichos datos, que puede derivarse de la publicación de los mismos en un Registro públicos vulnera la Ley Orgánica 15/1999.*

*Como punto de partida, la transmisión de datos a terceros distintos de su titular constituye una cesión o comunicación de datos, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.*

*Dicho esto, el artículo 11.1 de la Ley Orgánica dispone que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. Esta regla sólo se verá exceptuada en los supuestos contemplados en el artículo 11.2, entre los que pudiera resultar relevante a los efectos del presente supuesto el apartado a) que habilitan respectivamente la comunicación de los datos en caso de que así lo habilite una norma con rango de Ley.*

*Por tanto los datos que van a constar en los Registros de intereses, que tendrán carácter público, no son datos sensibles, sino información sobre las actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, y sobre bienes y derechos patrimoniales. Por tanto la comunicación de dichos datos, se encontraría amparada en el artículo 11.2 a) dado que la Ley de Bases del Régimen Local.”*

En consecuencia, dado el contenido otorgado a la Ley del Suelo, tras la modificación operada por la Ley de Bases de Régimen Local, el acceso a dicha información es público y los datos a incluir son los previstos en la misma norma, sin que por ello se vulnere la Ley Orgánica 15/1999, pues como anteriormente se señaló la cesión está amparada en una Ley.